CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA 2008. DERECHO ECLESIAÍSTICO ESPAÑOL¹

JORGE OTADUY

SUMARIO

I • TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS. 1. Libertad religiosa. 2. Libertad de expresión. 3. Derecho a la vida privada y familiar. 4. Derecho a un juicio equitativo. **II • TRIBUNALES ESPAÑOLES.** 1. Protección de datos. 2. Educación para la ciudadanía. 2.1. Reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia. 2.2. Rechazo del derecho a la objeción de conciencia. 2.3. Otorgamiento de medidas cautelares. 2.4. Rechazo de medidas cautelares. 2.5. Nulidad de normas generales. 2.6. Otros aspectos. 3. Derecho a la educación. 3.1. Elección de centro y zonificación. 3.2. Conciertos educativos. 3.3. Despido ideológico. 3.4. Modificación de ideario. 4. Enseñanza de la religión. 5. Profesores de religión. 5.1. Contratación del profesorado de religión y derechos fundamentales. 5.2. Indemnización por finalización del contrato y otros derechos económicos. 5.3. La enseñanza de la religión como experiencia docente. 5.4. Jubilación. 5.5. Profesores de religión evangélica. 6. Símbolos religiosos. 7. Seguridad Social. 8. Matrimonio. 8.1. Contrayentes del mismo sexo. 8.2. Pensión de viudedad. 8.3. Ajuste al Derecho del Estado. 9. Entidades religiosas. 10. Capellanes de hospitales. Relación laboral. 11. Exención del IVA. 12. Actividades delictivas. 13. Límites del derecho de libertad religiosa.

I. TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS

Son once las resoluciones del año 2008 reunidas en esta reseña sobre la actividad de la Corte de Estrasburgo en relación con el factor religioso. En cinco de ellas, el Tribunal europeo se pronuncia sobre la aplicación del artículo 9 del Convenio, relativo a la libertad religiosa; en dos ocasiones se declara su violación (*Religionsgemeinschaft der zeugen Jehovas* y *otros contra Austria* y *Alexandri-*

1. La numeración marginal corresponde al Repertorio de Jurisprudencia de Thomson Reuters Aranzadi. Téngase en cuenta que la abreviatura JUR se refiere a resoluciones no publicadas en los productos DVD de Thomson Reuters Aranzadi; se encuentran solamente en Westlaw, el servicio de Internet de la editorial; las que carecen de referencia proceden de fuente propia. Todas las resoluciones citadas en esta Crónica corresponden al año 2008.

nis contra Grecia) y en las tres restantes no encuentran los jueces motivos de antijuridicidad (*Kervanci contra Francia*, *Drogu contra Francia* y *Leela Förderkreis E. V. y otros contra Alemania*). Cuatro sentencias afrontan cuestiones relacionadas con la libertad de expresión (artículo 10 del Convenio), admitiendo en dos ocasiones la lesión de la norma jurídica (*Chalabi contra Francia* y *Kutular contra Turquía*) y rechazando en las restantes las pretensiones de los demandantes (*Soulas contra Francia* y *Leroy contra Francia*). Por último, me hago eco de una sentencia en materia de adopción (*E.B contra Francia*), en la que se declara la violación del derecho a la intimidad y a la vida privada, y de otra más (*Ahtinen contra Finlandia*), en la que un clérigo luterano busca amparo en el artículo 6 del Convenio para resistirse a un cambio de destino pastoral.

1. *Libertad religiosa*

En *Religionsgemeinschaft der zeugen Jehovas y otros contra Austria* (sentencia de 31 de julio de 2008 [JUR 2008 238651]) se declara la violación de los artículos 6, 9 y 14 del Convenio.

Los recurrentes, testigos de Jehová austríacos, reclaman el reconocimiento de la personalidad jurídica de su organización religiosa por parte de las autoridades del país. En 1978, una resolución administrativa dictaminó, en aplicación de una Ley de 1874, que no tenían derecho a obtener un pronunciamiento formal al efecto. En 1997 se rechazó de nuevo la demanda, argumentando que la entidad no podía ser reconocida como sociedad religiosa porque su organización internacional no era clara y por su actitud negativa en relación con determinadas instituciones del Estado, refiriéndose particularmente a su oposición al servicio militar, a la participación en determinados aspectos de la vida local y a ciertos tratamientos médicos. La Corte Constitucional anuló esta resolución y los Testigos de Jehová obtuvieron reconocimiento como comunidad religiosa en 1998. Los recurrentes, sin embargo, comenzaron una nueva serie de reclamaciones para obtener la condición de *sociedad religiosa*, que comporta ciertas ventajas, principalmente en materia fiscal. La pretensión no fue aceptada, con el argumento de que deben transcurrir al menos diez años para que una comunidad religiosa pueda optar a ese ulterior reconocimiento.

Consideran los recurrentes que se ha producido una violación del artículo 9 del Convenio y también del 14, en relación con el anterior. Asimismo, estiman lesionado el artículo 6 por la excesiva duración del proceso.

El derecho de las confesiones religiosas a una existencia autónoma es indispensable para el pluralismo en una sociedad democrática, según el parecer de

la Corte. El Gobierno no ha dado relevantes ni suficientes razones para justificar la demora. La injerencia ha ido más allá de toda necesaria restricción de la libertad religiosa de los demandantes. Ha habido violación del artículo 9.

Asimismo, se admite la lesión del artículo 14 en relación con el 9. La Corte acepta que la espera de diez años para la obtención de estatuto de *sociedad religiosa* puede resultar razonable para las organizaciones de nueva creación o desconocidas, pero difícilmente se justifica en el caso de un grupo bien establecido nacional e internacionalmente y por lo tanto suficientemente conocido por parte de las autoridades, como es el caso de los Testigos de Jehová. En este caso, las autoridades podrían haber verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley en un período de tiempo más breve. El contraste con la actuación de las autoridades en otros casos semejantes —como el de la Iglesia Copta Ortodoxa— lo pone en evidencia. La diferencia de trato no se ha basado sobre una justificación razonable y objetiva.

La segunda parte del proceso, con una duración de 5 años y once meses, con dos períodos de inactividad, uno de los cuales no fue justificado por el Gobierno, no ha cumplido las exigencias de tiempo razonable del artículo 6.

En *Alexandrinis contra Grecia* (sentencia de 21 de febrero de 2008) se declara la violación de los artículos 9 y 13 del Convenio.

El demandante, abogado griego, denuncia la exigencia legal de prestar juramento como condición previa para el ejercicio profesional. Para ser autorizado a emitir en su lugar una declaración solemne, el interesado tendría que declarar su condición de ateo o manifestar que su religión no le permitía prestar ese juramento. La Corte declara la violación de artículo 9 del Convenio por la obligación impuesta al recurrente de declarar la no profesión de la religión cristiana ortodoxa.

En *Leela Förderkreis E. V. y otros contra Alemania* (sentencia de 6 de noviembre de 2008 [JUR 2008 342021]) la Corte europea declara la violación del artículo 6 del Convenio, pero no del 9. No considera necesario examinar los artículos 10 y 14.

Son demandantes tres asociaciones religiosas reconocidas por el Ordenamiento alemán. En 1979, el Gobierno puso en marcha una campaña para advertir acerca de los peligros de estos grupos, a los que calificó de «sectas pseudo religiosas» y afirmó que «tenían carácter destructivo» y que «manipulaban a sus miembros». En 1984 se inició un proceso para exigir que el Gobierno abandonara su actitud hostil. En 2002 se pronunció el Tribunal Constitucional prohibiendo el uso de los términos «destructivo», «pseudo-religioso» y «que manipulan a sus miembros» en relación con los mencionados grupos.

La Corte reconoce que la duración del proceso ha sido excesiva —más de dieciocho años— y declara la violación del artículo 6 del Convenio. Asume, asimismo, que la actuación del Gobierno ha supuesto una injerencia en el derecho de los recurrentes a la libertad religiosa. Considera, sin embargo, que la injerencia debe entenderse como prescrita por la ley y ordenada a la consecución de una finalidad legítima, cual es la información pública acerca de los peligros de grupos conocidos comúnmente como sectas.

La campaña informativa respondía a una situación de alarma social como consecuencia de la preocupante actividad de ciertos nuevos grupos religiosos, dirigidos principalmente a los jóvenes. La campaña, sin embargo, no supuso una prohibición del ejercicio del derecho de los demandantes a la libertad de religión o creencias. Es más, el Tribunal Constitucional estableció unos límites, autorizando ciertas expresiones y no otras. Las afirmaciones del Gobierno, en definitiva, no excedieron aquello que un Estado democrático debe realizar al servicio del interés público. La injerencia en el derecho de las asociaciones a manifestar su religión o creencias se encuentra justificada y resulta proporcionada a la finalidad perseguida y la Corte estima que no se ha producido violación del artículo 9 del Convenio.

En *Kervanci contra Francia* (sentencia de 4 de diciembre de 2008 [TEDH 2008 98]) se desestima la demanda, por inexistencia de violación del artículo 9 del Convenio (y en idéntico sentido, *Dogru contra Francia*, de la misma fecha).

La demandante, ciudadana francesa de religión islámica, fue expulsada del centro escolar por no quitarse el velo islámico durante las clases de gimnasia. Según las autoridades escolares, la alumna fue informada acerca de las reglas del centro sobre este particular en el momento de su inscripción. Hay que tener en cuenta que el conflicto se planteó con anterioridad a la promulgación de la Ley 2004-228 de 15 de marzo, sobre el uso de signos o vestimentas que manifiesten la pertenencia religiosa en centros escolares públicos, lo que hace que la identificación de la base legal para la solución del caso resulte algo más compleja y discutible.

El Tribunal europeo resuelve en al línea de casos anteriores, a los que se remite, principalmente *Leyla Sahin contra Turquía*, *Köse y otros contra Turquía* y *Dahlab contra Suiza*.

No niegan los jueces que el uso del velo pueda ser considerado como un acto motivado o inspirado por una religión, ni que la expulsión del centro escolar suponga una restricción de la libertad religiosa de la estudiante. La cuestión se centra en determinar si ese acto puede considerarse previsto por la ley,

dotado de finalidad legítima y necesario es una sociedad democrática. La Corte encuentra, en efecto, base legal suficiente en el Derecho interno, expresado en normas regularmente publicadas y en la jurisprudencia del Consejo de Estado y, en consecuencia, la demandante podía prever razonablemente que el rechazo a desprenderse del velo podía dar lugar a la expulsión.

El Tribunal admite un margen de apreciación de los Estados en cuanto a la regulación del uso de los símbolos religiosos, en función de las tradiciones nacionales y de las exigencias derivadas de la protección de los derechos y libertades y del mantenimiento del orden público. En el caso, considera que las autoridades internas justificaron la medida de prohibición del uso del velo en clase de educación física por el respeto de las reglas internas del centro escolar sobre seguridad, asistencia e higiene. Las jurisdicciones nacionales señalaron que la negativa a quitarse el velo sobrepasó los límites del derecho a expresar y manifestar sus creencias religiosas en el interior del centro.

2. *Libertad de expresión*

La Corte de Estrasburgo se pronuncia a favor de la violación del artículo 10 del Convenio en los casos *Kutlular contra Turquía* (sentencia de 29 de abril de 2008 [JUR 2008 129545]) y *Chalabi contra Francia* (sentencia de 18 de septiembre de 2008 [TEDH 2008 58]).

Kutlular, periodista turco, fue condenado por un delito de incitación al odio o a la hostilidad —con arreglo al artículo 312 del Código Penal— por unas declaraciones en las que, según el Gobierno, establecía una relación de causa-efecto entre un terremoto y determinado proceso político que calificaba negativamente. Se refirió al seísmo —conforme a sus convicciones y a las de una parte de la sociedad turca, en el seno de la cual se encontraba la audiencia que asistía a cierta ceremonia conmemorativa en una mezquita—, como un «fenómeno espiritual».

El Tribunal europeo subraya que, confiriendo un sentido religioso a una catástrofe natural, el discurso infundía superstición, intolerancia y oscurantismo, podría servir al proselitismo e incluía un tono ofensivo hacia los no creyentes y hacia el Gobierno. Pero no podría encontrarse una incitación a la violencia ni pretendía fomentar el odio contra las personas que no formen parte de la comunidad religiosa a la que pertenece el demandante.

La injerencia en el derecho de libertad de expresión no puede calificarse como necesaria en una sociedad democrática, ya que no guarda relación de proporcionalidad con el fin perseguido por la legislación nacional.

Disiente el Juez Turmen, para quien la violencia es inherente al discurso del odio.

En *Chalabi contra Francia* (sentencia de 18 de septiembre de 2008 [TEDH 2008 58]), el demandante, ex miembro del Consejo de administración de la Gran Mezquita de Lyon, alega violación de la libertad de expresión debido a su condena por difamación pública de un particular. En el curso de una entrevista publicada por una revista, se deslizaron algunas expresiones de carácter difamatorio del director de la citada Gran Mezquita, que fueron consideradas por éste como un ataque a su persona, toda vez que arrojaban dudas sobre su integridad moral y religiosa. Todo ello, sin haber verificado seriamente el fundamento de las afirmaciones.

Para el Tribunal, no se demuestra que la restricción de la libertad de expresión esté fundada sobre la «necesidad en una sociedad democrática», como pide el apartado 2 del artículo 10 del Convenio. La sentencia argumenta en tres tiempos que el difamado no es un particular sino una personalidad pública, debido a la dimensión institucional y a la importancia de las funciones que desempeña; como director y gerente estatutario de la Gran Mezquita de Lyon, representaba a la comunidad musulmana en la región lionesa, exponiéndose así a las críticas sobre el ejercicio de sus funciones. En segundo lugar, el Tribunal estima que, habida cuenta del tono general de la entrevista y el contexto en el que se pronunciaron, las palabras enjuiciadas constituyen juicios de valor y no meras declaraciones de hecho. Por último, entiende que las palabras enjuiciadas no carecían de base fáctica; la parte civil era investigada por abuso de confianza y estafa, y en la época de los hechos enjuiciados se sustentaba este asunto.

En conclusión, el Tribunal estima que la condena del demandante no se basa en unos motivos «pertinentes» y «suficientes». Considera, por el contrario, que esta condena constituye una injerencia desproporcionada que no respondía a una necesidad social imperiosa y que, en consecuencia, no era necesaria en una sociedad democrática. Por consiguiente, declara violación del artículo 10 del Convenio.

El Tribunal europeo no encuentra violación del artículo 10 del Convenio en los casos *Soulas y otros contra Francia* (sentencia de 10 de julio de 2008 [TEDH 2008 42]) ni *Leroy contra Francia* (sentencia de 2 de octubre de 2008 [TEDH 2008 71]).

En el primero, el litigio trae causa de la publicación en Francia de un libro en el que se trataba de demostrar que el Islam pretende llevar a cabo una conquista hostil de Francia y Europa y que la delincuencia de los jóvenes

es la manifestación del inicio de una guerra civil étnica de conquista de territorios.

El director de la editorial y el autor de la obra fueron condenados, al amparo de la Ley de 29 de julio de 1881, de libertad de prensa, por un delito de incitación a la discriminación, al odio o a la violencia respecto de una persona o grupo de personas por su raza, origen, etnia o religión. No cabe concluir, según la jurisdicción francesa, que la mencionada Ley instaure un régimen de protección no igualitaria y discriminatoria en beneficio únicamente de las personas pertenecientes a una religión, régimen que excluiría a los ateos, y no vulnera el principio de libertad de pensamiento, conciencia y religión que establece el artículo 9.1 del Convenio.

En la demanda presentada ante el Tribunal europeo se invoca la protección del artículo 10.

La condena constituye, indudablemente, una injerencia en el ejercicio de la libertad de expresión, pero se encuentra prevista por la ley y se inspira en fines legítimos. Resta determinar si era necesaria en una sociedad democrática. Del análisis de los principios generales que deben inspirar la aplicación del derecho de la libertad de expresión así como de la aplicación de esos principios al caso concreto se deduce que los motivos del Tribunal penal fueron suficientes y apropiados. La Ley de 1881 constituye un marco estricto para la libertad de expresión y, en este caso, los tribunales no superaron el margen de apreciación de que disponían. La injerencia en el ejercicio de este derecho era necesaria en una sociedad democrática. No hay violación del artículo 10.

En el caso *Leroy contra Francia*, el demandante incurrió en un delito de apología del terrorismo por el contenido de una viñeta publicada en un semanario, mediante la que reivindicó la eficacia del acto terrorista, idealizando los atentados del 11 de septiembre. Apoyó y glorificó la destrucción del «imperialismo americano» por medio de la violencia.

La expresión artística y el comentario social admiten ciertas dosis de exageración y de distorsión de la realidad, sin embargo, ello no impide que el creador, cuya obra pertenece al ámbito de la expresión política o militante, escape a toda posibilidad de restricción en el sentido del apartado 2 del artículo 10. Debe tenerse en cuenta, además, el impacto del mensaje en una región políticamente sensible, como es el Sur de Francia.

La sanción se basa en razones pertinentes y suficientes. No hay violación art. 10.

3. *Derecho a la vida privada y familiar*

En *E.B. contra Francia* (sentencia de 22 de enero de 2008 [TEDH 2008 4]), la demandante —mujer soltera conviviente de modo estable con otra mujer— no obtuvo la autorización administrativa para proceder a la adopción de un niño. El Derecho francés autoriza a adoptar tanto a los matrimonios como a las personas solteras, previsión que dio fundamento a la solicitud de E.B.

La investigación acerca de la idoneidad de la solicitante desaconsejó atender a su demanda, en atención a que presentaba una laguna en el papel de la figura paterna, que podía afectar al desarrollo del niño; y a que la pareja de la solicitante no se encontraba involucrada, aunque no se oponía al plan de la solicitante.

La resolución administrativa fue confirmada en diferentes instancias hasta llegar en 2002 al Consejo de Estado. El Alto órgano judicial dictaminó que la denegación no respondía a motivaciones relacionadas con la orientación sexual de la demandante sino al interés del niño, pues no se ofrecían garantías suficientes en el plano familiar —consecuencia de la falta de implicación en el proceso de la amiga de la demandante— y los informes psicológicos alertaban acerca de riesgos relativos a la estructuración de la personalidad del niño en esas circunstancias.

La solicitante presentó demanda contra Francia por violación del artículo 8 del Convenio en conexión con el 14. Alegaba discriminación por su condición homosexual.

El Tribunal europeo reconoce que la decisión del litigio no se fundó sobre la orientación sexual de la demandante ni esa orientación fue objeto de una postura hostil, pero que en la resoluciones judiciales había referencia «implícita» a la homosexualidad. Cuando se trata de la orientación sexual, son necesarios motivos especialmente serios y convincentes para justificar una diferencia de trato en lo que respecta a los derechos protegidos por el artículo 8. El Tribunal admite que era dudoso que la persona cumpliera las exigencias del Derecho francés en el plano familiar, educativo y psicológico para adoptar. Sin embargo, sostiene que, aun concurriendo alguna circunstancia que haría atendible el rechazo de la idoneidad de la solicitante, un motivo ilegítimo contamina el conjunto. El Tribunal europeo se pronuncia por la existencia de discriminación homófoba.

Hay opiniones disidentes de los jueces Costa, Tumen, Jociene, Ugrehelidze, Zupanic, Loucaides y Mularoni.

Según el parecer de Costa, al que se adhiere Tumen, Jociene, Ugrekheidze, no fue la homosexualidad la que le impidió obtener la preceptiva autorización administrativa.

Zupanic sostiene que la adopción de un niño no es un derecho sino un privilegio y que no procede analizar el caso desde la perspectiva del artículo 8 del Convenio. Es el interés del niño el que debe primar en el litigio y protegerse en el futuro.

En opinión de Loucaides, «puede haber situaciones en las que una distinción de trato sea necesaria por razones de sexo, religión, etc., o cualquier otra, si la circunstancia de que se trata incide en la cuestión particular a examen». Y cita como ejemplo el reciente caso *Ismailova contra Rusia*, en el que la religión no amparó ciertos comportamientos paternos contrarios a lo que se estimó el bien integral del hijo. Y continúa:

«Tengo la firme convicción de que nadie puede invocar su religión, sexo o cualquier otra situación para aprovecharse de la prohibición de discriminación como motivo que impide excluirle de una actividad en concreto debido a las incidencias negativas que tal situación puede implicar en relación con una cuestión específica.»

Los homosexuales, al igual que toda persona, tienen derecho a ser ellos mismos y no deben ser objeto de una discriminación o cualquier otro trato desfavorable a causa de su orientación sexual. Deben, sin embargo, al igual que cualquier otra persona que presenta cierta peculiaridad, aceptar no poder aspirar a ciertas actividades que, por su propia naturaleza y en ciertas circunstancias, no se concilian con su modo de vida o su particularidad.»

Con otras palabras, ser lesbiana no debería ser una ventaja desde el punto de vista jurídico, como sucede en este caso.

Loucaides rechaza la tesis de la mayoría sobre lo que agudamente denomina la «contaminación por ósmosis» (la teoría de la contaminación, dice, pertenece a la ciencia médica).

Mularoni, por su parte, sostiene que, si una decisión se basa en varios motivos, es suficiente con que uno solo de ellos sea válido para que se acepte la validez de dicha decisión.

4. Derecho a un juicio equitativo

En *Ahtinen contra Finlandia* (sentencia de 23 de septiembre de 2008 [TEDH 2008 59]) el demandante es un clérigo de la Iglesia evangélica luterana que rechaza el traslado de oficio eclesiástico ordenado por el Cabildo. Alega

violación del artículo 6 del Convenio, como consecuencia de la imposibilidad de presentar un recurso extraordinario contra la decisión.

El Tribunal declara por unanimidad que no se ha producido la violación invocada, y se remite a doctrina ya asentada en casos como *Duda y Dudová contra la República Checa*, de 2001, en el que se afirma que la resolución judicial de cuestiones como la continuación del servicio de un sacerdote en una iglesia sería contraria a los principios de autonomía e independencia garantizados por, *inter alia*, la Carta de Derechos y Libertades Fundamentales.

El Tribunal señala que la Iglesia Evangélica Luterana tiene derecho, de conformidad con la Ley finlandesa, a administrar sus propios asuntos. Es independiente en temas como el nombramiento de sus sacerdotes y su posterior servicio. La legislación aplicable deja a la Iglesia, como empleadora, que determine el período y el lugar de la actividad pastoral. El Tribunal señala que, al aceptar un empleo eclesiástico, los sacerdotes son conscientes de la posibilidad de traslado posterior. Por tanto, el demandante, aceptando servir como sacerdote en la Iglesia, se compromete a acatar sus normas, que forman parte de la Ley de la Iglesia y del Reglamento del Procedimiento de la Iglesia.

II. TRIBUNALES ESPAÑOLES

1. *Protección de datos*

Son numerosísimos los fallos de la Audiencia Nacional que, hasta septiembre de 2008, han venido aplicando la doctrina sentada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo mediante sentencia de 10 de octubre de 2007 (RJCA 2007/796)². Según ésta, la autoridad eclesiástica competente habría de anotar marginalmente en la partida de bautismo el abandono de la Iglesia católica de quienes invocaren el derecho de cancelación de datos personales reconocido por la legislación española. De no hacerlo, tendría que motivar el acto, con apercibimiento de incurrir, si no procediere así, en las infracciones previstas en el artículo 44 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal.

La mayor parte de las sentencias resuelven casos planteados en la Archidiócesis de Valencia, aunque también se encuentran implicadas otras diócesis, como Madrid y Orihuela-Alicante.

2. Vid. «Crónica de jurisprudencia 2007. Derecho eclesiástico español», en *Ius Canonium*, XLVIII, n. 95, 2008, pp. 296-298. Y en el mismo número de la revista J. OTADUY, «Iglesia católica y Ley española de protección de datos: falsos conflictos», pp. 117-140.

La sentencia del Tribunal Supremo de 19 de septiembre de 2008 (*Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 6ª [RJ 2008 5475]*) declara haber lugar al recurso presentado por la Archidiócesis de Valencia contra la sentencia de la Audiencia Nacional citada anteriormente y sostiene que los libros canónicos no son ficheros.

No cabe aceptar que esos datos personales, a que se refiere la Sala de instancia, estén recogidos en los Libros de Bautismo como un conjunto organizado tal y como exige el art. 3.b) de la LO 15/99, sino que son una pura acumulación de estos que comporta una difícil búsqueda, acceso e identificación en cuanto no están ordenados ni alfabéticamente, ni por fecha de nacimiento, sino sólo por las fechas de bautismo, siendo absolutamente necesario el conocimiento previo de la Parroquia donde aquél tuvo lugar, no resultando además accesibles para terceros distintos del bautizado, que no podrían solicitar ajenas partidas de bautismo.

Añade que, en cualquier caso, no cabría estimar aplicable el art. 4.3 de la Ley de protección de datos personales, en que se funda el acto administrativo impugnado y se confirma por la sentencia, según el cual los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que respondan con veracidad a la situación actual del afectado.

En los Libros de Bautismo no cabe apreciar ninguna inexactitud de datos, en cuanto en los mismos se recoge un dato histórico cierto, salvo que se acredite la falsedad, cual es el referente al bautismo de una persona y cuando esta solicita la cancelación de ese hecho, no está pretendiendo que se corrija una inexactitud en cuanto al mismo, sino que en definitiva está intentando y solicitando un sistema nuevo y diferente de registro de nuevos datos personales.

La doctrina establecida, con todo, no responde a las motivaciones de fondo, que justificarían la exclusión a partir de la consideración registral de tales instrumentos, cuyos asientos hacen prueba de la recepción de los sacramentos por parte de los fieles y, en consecuencia, son determinantes de su estado canónico. Según el Alto Tribunal —al que bastó analizar uno de los motivos del recurso para casar la sentencia de la Audiencia Nacional recurrida³—, los libros de bautismos no son ficheros por que carecen de la estructura mínima a ellos exigible.

3. Los motivos del recurso eran tres. En aquellos que el Tribunal no entró a considerar se contenían las cuestiones verdaderamente sustantivas relativas al caso. En el primero, se invocaba la inviolabilidad de los archivos eclesiásticos, principio reconocido en el artículo I.6 del Acuerdo sobre asuntos jurídicos. El recurrente reputaba de aplicación el artículo 27 de la Convención de Viena de 23 de mayo de 1969, en el que se establece que «una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un Tratado». El actor, discrepaba de la interpretación de la Audiencia Nacional según la cual la inviolabilidad protegería frente a la intervención del Estado pero no de los individuos que invocan el ejercicio de un derecho fundamental. En el segundo de los motivos casacionales, la representación del Arzobispado de Valencia invocaba la violación del artícu-

El parecer del Tribunal Supremo es que la Ley contempla los ficheros desde una perspectiva dinámica, no sólo como un mero depósito de datos

sino también y sobre todo como una globalidad de procesos o aplicaciones informáticas que se llevan a cabo con los datos almacenados y que son susceptibles, si llegasen a conectarse entre sí, de configurar el perfil personal. Todo ello nos lleva a concluir que los Libros de bautismos en ningún caso pueden ser considerados como ficheros de datos personales en los términos definidos tanto en el artículo 2 de la Directiva comunitaria como de las leyes orgánicas 5/92 y su posterior modificación en la Ley 15/99.

El Alto Tribunal reconoce, en suma, que los libros de bautismos no cumplen las funciones que cabe suponer a los ficheros a los que se refiere la Ley.

Hay un Voto particular. Sin disentir sobre el fondo de la causa, se sostiene la opinión de que la Sala, antes de pronunciarse, debió dirigirse al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y, en virtud del artículo 234 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, interrogarle a título prejudicial sobre la interpretación de los conceptos de «fichero de datos personales» y «tratamiento de datos personales», para, una vez obtenida respuesta, resolver en consecuencia el conflicto que subyace en este recurso de casación.

A la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de septiembre siguió la de 14 de octubre (RJ 2008 7114) y otras posteriores, que constituyen doctrina legal. La Audiencia Nacional, en los casos recibidos con posterioridad, resuelve estimar los recursos interpuestos por las diócesis, toda vez que,

en virtud de lo expuesto en estas dos sentencias, no resulta aplicable la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal a los Libros de Bautismo por no tener éstos la consideración de fichero de datos de carácter personal (En estos términos, por ejemplo, sentencias de 29 de octubre [RJCA 2008 694] y de 5 de noviembre).

2. Educación para la ciudadanía

Ocho Tribunales Superiores de Justicia han tenido ocasión de pronunciarse a lo largo del año 2008 sobre aspectos relacionados con las asignaturas de Educación para la ciudadanía. En la mayor parte de los casos, estas resoluciones han dado respuesta a demandas de reconocimiento de la objeción de conciencia

lo 6 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa en relación con el artículo 16.1 de la Constitución. Para el Arzobispado, el derecho fundamental a la protección de datos, en su vertiente de cancelación de los mismos, estaría limitado por el derecho fundamental a la libertad religiosa que implica su libertad de organización, señalando que en todo caso no se podría obligar al Arzobispado a efectuar la anotación precisamente en el Libro de bautismos.

cia a cursar esas materias. Así ha acontecido en Asturias, Andalucía, Rioja, Navarra y Baleares. La suerte quedó repartida: en Asturias, Baleares y Navarra la pretensión de los recurrentes fue desestimada, mientras que en La Rioja y en Andalucía se admitió el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia. En Andalucía se cuentan hasta tres resoluciones sobre aspectos diversos relativos a la objeción de conciencia a la asignatura, resultado de la diversidad de situaciones y de estrategias procesales.

Además, los Tribunales Superiores del País Vasco y de Castilla y León han publicado en 2008 resoluciones sobre medidas cautelares en recursos sobre esta materia. Una vez más, los pareceres judiciales han sido discordantes: contrario al reconocimiento en el primer caso y favorable en el segundo.

En Valencia se suscitó un conflicto a propósito de la norma autonómica que estableció las formas de organización pedagógica de la asignatura, cuya ejecución fue suspendida por el Tribunal Superior, que dictó auto de medidas cautelares.

Se recogen también algunas resoluciones de tribunales inferiores sobre la materia⁴.

2.1. *Reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia*

La primera sentencia favorable al reconocimiento de la objeción de conciencia en materia de Educación para la ciudadanía fue del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sevilla (*Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3^a, sentencia de 4 de marzo 2008 [RJCA 2008 148]*).

Recaída en procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona, estimó el recurso contencioso-administrativo formulado contra la resolución de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía de 13 de noviembre de 2007, que no reconoció al hijo de los recurrentes el derecho a la objeción de conciencia frente a la materia Educación para la Ciudadanía.

La sentencia impugnada, tras hacer referencia a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, admite que

4. La circunstancia de que, cuando se escriben estas líneas, sean ya conocidas las sentencias del Tribunal Supremo de 11 de febrero de 2009 —que responden solamente a recursos procedentes de Andalucía y Asturias— no condenan a las resoluciones aquí reseñadas a la irrelevancia. Algunas de ellas darán lugar a nuevos recursos ante el Tribunal Supremo y, en todo caso, presentan una doctrina que, mejor o peor fundada, merece atenta consideración.

en los Reales Decretos 1631/06 y 1513/06, que establecen las enseñanzas mínimas, se emplean conceptos de indudable trascendencia ideológica y religiosa, como son ética, conciencia moral y cívica, valoración ética, valores, o conflictos sociales y morales. Ante ésta situación, es razonable que los demandantes, por razones filosóficas o religiosas, que no tiene por qué exponer detalladamente, como también señala el TEDH y prevé el art. 16.2 CE, pueden estar en desacuerdo con parte de la asignatura, y lógico que soliciten se excluya de ella a su hijo, a falta de otras previsiones normativas que permitan salvaguardar su libertad ideológica o religiosa.

Considera, finalmente, que el interés público está en la garantía de los derechos, que, en última instancia, es lo que justifica la existencia del Estado y sus potestades.

Entre estos derechos están la libertad ideológica y religiosa (art.16.1 CE), y el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones (art. 27.3 CE). La salvaguarda de estos derechos mediante la objeción de conciencia, no pone el peligro el ordenamiento jurídico democrático, simplemente refleja su funcionamiento. En último caso, corresponde al Legislador crear instrumentos para hacer compatible esos derechos con que la enseñanza básica sea obligatoria y gratuita (art 27.4 CE).

Concluye que el acto impugnado es nulo por vulnerar los derechos de los arts. 16.1 y 27.3 CE, procediendo a declarar su nulidad y reconocer la situación jurídica individualizada de los demandantes en los términos solicitados.

La misma Sala tuvo ocasión de pronunciarse de nuevo sobre un asunto similar, con la variante de no encontrarse los hijos de los recurrentes en la obligación de recibir la docencia de la indeseada asignatura en el corriente curso académico (*Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sevilla. Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3^a. sentencia de 9 de abril de 2008 [JUR 2008 332317]* En el mismo sentido, *sentencia de 19 de noviembre*).

Rechazó el Tribunal la excepción de falta de legitimación activa alegada por la Administración porque

no es preciso que los padres de escolares menores de edad se enfrenten a la realidad actual de cursar la disciplina que objetan en conciencia, para que puedan efectivamente plantear la objeción. Muy al contrario, resulta sumamente razonable permitir a los interesados la posibilidad de anticiparse a las consecuencias en absoluto queridas ni deseadas del hecho consumado. Piénsese, a título de ejemplo, en el caso por demás tan frecuente del objetor al servicio militar obligatorio (genuina expresión de esta figura jurídica). Parece respetable la idea de que el joven en edad militar pueda objetar antes de ser llamado a filas.

Seguidamente, el Tribunal aplica al caso la doctrina de la sentencia de 4 de marzo.

El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (*Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1^a, sentencia de 8 de julio [RJCA 2008 313]*) declaró la nulidad de pleno derecho de la actuación administrativa denegatoria de la solicitud de reconocimiento del derecho a ejercer la objeción de conciencia, al amparo de los artículos 16 y 27 de la Constitución, respecto de los contenidos del conjunto de asignaturas reguladas en los Reales Decretos 1513/2006, 1631/2006 y 1467/2007 y englobadas bajo la denominación Educación para la ciudadanía, que habría de cursar el hijo del recurrente, y para quien se solicitó la exención de cursarlas.

En el amplio desarrollo de la sentencia, la Sala aborda el objeto de su análisis en torno a tres bloques argumentativos. 1^o. El alcance de conceptos como moral y ética; 2^o. La relación entre la Ley orgánica de educación y los reglamentos que la desarrollan; 3^o. El estudio detallado de los contenidos de los reales decretos desde la perspectiva de los derechos fundamentales de libertad religiosa e ideológica y del derecho de los padres a que sus hijos reciban una formación religiosa y moral conforme con sus convicciones.

A juicio del Tribunal, el texto reglamentario pone de manifiesto un contenido de formación moral en esta asignatura y su expresa pretensión de conformar en los alumnos una conciencia moral concreta —la denominada «conciencia moral cívica»—, que sería una especie de moral pública, imponiéndoles como normas morales una serie de valores concretos que son los elegidos por el Estado en un determinado momento histórico, erigiéndolo así en adoctrinador de todos los ciudadanos en valores y en virtudes cívicas, pues trata de impartir e imponer conductas ajustadas a una moral concreta, no «neutra», dando por su puesta una ética cívica o pública distinta de la personal.

2.2. Rechazo del derecho a la objeción de conciencia

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha conocido durante el año 2008 varios casos de objeción de conciencia a la asignatura controvertida (*Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1^a, sentencia de 11 de febrero [JUR 2008 55260]* y *22 de febrero [JUR 2008 323838]*).

Se recurren las resoluciones administrativas desestimatorias de la solicitud de reconocimiento de la objeción, por considerar que los contenidos de la materia atentan contra el derecho a la libertad religiosa e ideológica de los alumnos y del derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones.

La Sala no comparte la argumentación del Abogado del Estado en el sentido de que no exista un derecho constitucional a la objeción de conciencia

a un deber impuesto normativamente. Es más, reconoce el derecho a que se garantice la libertad ideológica y religiosa incluyendo la de los padres en el aspecto referido; sin embargo, dicen los magistrados, se desconoce el contenido de la asignatura a cuya enseñanza se oponen los recurrentes.

Entiende la Sala que en el caso se suscita, en realidad, la posible inconstitucionalidad de la norma que establece la obligatoriedad de la asignatura por considerarla contraria a la libertad religiosa e ideológica garantizada por el artículo 16.1 CE. Circunstancia que hace decaer, como ya se ha dicho, la afirmación de que no se halla previsto un derecho a la objeción de conciencia a un deber impuesto normativamente. Nada impide que se suscite cuestión de inconstitucionalidad respecto a dicha normativa de la que el acuerdo recurrido constituye un acto de ejecución. No obstante —añade— al encontrarse el procedimiento ayuno de toda prueba, se desconoce el contenido de las asignaturas a cuya enseñanza se oponen; el mero enunciado de una determinada asignatura no afecta a derecho fundamental alguno; la vulneración de derechos fundamentales sólo es predicable del acto concreto de las enseñanzas de asignaturas que afectasen a la libertad religiosa y no de la Ley orgánica 2/2006, de Educación, de la que traen causa los acuerdos impugnados.

No cabe impugnar genéricamente las asignaturas relativas a Educación para la ciudadanía como contrarias a la libertad religiosa e ideológica y, en consecuencia, no resulta necesario plantear cuestión de inconstitucionalidad de la Ley orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación.

La resolución del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (*Sala de lo Contencioso-Administrativo, sentencia de 9 de octubre*) resolvió negativamente la petición de objeción de conciencia presentada por los padres de los menores. Tras el análisis de los contenidos de la asignatura y de los libros de texto que los demandantes estiman contrarios a sus convicciones concluye la Sala, de manera escasamente argumentada, que

no hallamos ni en las exposiciones de motivos de las normas que las regulan, ni en el currículo ni en el contenido de los textos nada que puede razonablemente entenderse que excede de lo que es una enseñanza objetiva, crítica y neutral de una materia que es de obligada impartición ex artículo 27.2 de la Constitución española.

Despacha la cuestión con una referencia a que el tema, «según fácilmente se ve, trasciende lo jurídico y adquiere connotaciones ideológico-filosóficas».

Se afirma que la sociedad es fruto «del pacto social», que existe una ética cívica para todos «que no puede tener otro fundamento que el propio pacto

social» y que el positivismo es una «consecuencia lógica» de lo anterior. Sostiene, en suma, la discutible tesis de que el positivismo jurídico sea la única doctrina posible para la organización de la vida social, por considerarse una noción neutral y objetiva en el tratamiento de los derechos fundamentales.

El Tribunal Superior de Justicia de Islas Baleares (*Sala de lo Contencioso-Administrativo, sentencia de 5 de noviembre de 2008*) también es contrario al reconocimiento de la objeción de conciencia en este caso. Constituyen el objeto del recurso —planteado por la vía del procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona— las resoluciones de la Consejería de Educación por medio de las cuales se desestimaron las solicitudes de objeción de conciencia presentadas por el recurrente y en las que se solicitaba que sus hijos no cursaran las asignaturas englobadas con el nombre Educación para la ciudadanía.

La Sala, tras declarar la admisibilidad del recurso, hace amplias consideraciones acerca del conjunto de las asignaturas de Educación para la ciudadanía y determina lo que considera los principios generales que deben ser tenidos en cuenta para la resolución del conflicto, con amplia referencia a la jurisprudencia del Tribunal europeo de derechos humanos. Tras estas reflexiones, procede, en el Fundamento jurídico 6º, a la aplicación de los principios sobre el contenido de la asignatura. Sostiene que la materia Educación para la ciudadanía puede consistir no sólo en divulgar o poner en conocimiento los valores, sino también en inculcar o promover en el alumno aquellos que constituyen el sustrato de la ciudadanía democrática recogidos en la Constitución. Es la propia Constitución —dice— la que impone el objetivo de promover una educación que respete los principios democráticos de convivencia y los derechos y libertades fundamentales; de fomentar una cultura de resolución pacífica y dialogada de los conflictos y el respeto por las diferencias, con rechazo de cualquier tipo de discriminación, y de desarrollar la autonomía personal y las relaciones interpersonales entre los destinatarios de la actividad educativa.

Desestima el recurso y declara conforme al Ordenamiento jurídico los actos administrativos impugnados y los confirma.

2.3. Otorgamiento de medidas cautelares

El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (*Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª, auto de 7 de julio [JUR 2008 243136]*) otorgó medidas cautelares en recurso contra resolución denegatoria de la objeción de conciencia a la asignatura de Educación para la ciudadanía. Solicitaba el recurrente

la nulidad de la resolución y la exención de cursar la asignatura. El argumento de la Sala fue que la tutela judicial debe ser efectiva y no lo sería si, con el pretexto del carácter revisor de la jurisdicción contencioso-administrativa, hubieran de esperar a que la lesión que temen se produjese tras comenzar a recibir la nueva formación que impugnan con el inicio del curso escolar próximo. De la medida cautelar solicitada —añade— no resultarán perjuicios ni perturbación de los intereses generales ni de terceros.

El auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Valladolid (*Sala de lo Contencioso-Administrativo*), de 7 de noviembre de 2008, se dicta en incidente sobre medidas cautelares, siendo procedimiento principal el recurso presentado contra la denegación de la solicitud de objeción de conciencia a cursar la asignatura educación para la ciudadanía. Estima la Sala que concurre el *periculum in mora*, pues de ejecutarse el acto podría producirse una situación jurídica irreversible. En la tesis de un hipotético fallo estimatorio, el recurso, de no adoptarse la medida que ahora se solicita, perdería su finalidad. Los derechos de libertad ideológica y a decidir la formación moral de los hijos no admiten una genuina reparación *in natura* en caso de vulneración, pues ese derecho paterno ya habría sido desconocido por la Administración demandada. No se aprecian elementos excusantes, como la afectación del interés general o de terceros.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huesca (*auto de 5 de junio [RJCA 2008 357]*) suspende la ejecución de la resolución administrativa impugnada, mediante la que se acordaba no haber lugar a la objeción de conciencia frente a la asignatura Educación para la ciudadanía, obligando a los hijos del solicitante a cursarla, en contra de las convicciones de sus progenitores.

La suspensión reclamada no provoca ningún daño a tercero ni perturba el interés público. La ejecución del acto administrativo, por su parte, haría perder la finalidad legítima del recurso,

pues provocaría que los hijos menores de la parte actora recibieran una enseñanza, o adoctrinamiento, en unos valores que no son los compartidos por sus progenitores, que es lo que éstos tratan de evitar, por lo que de no adoptarse las medidas propuestas los alumnos recibirían tales enseñanzas no queridas, lo que mermaría la eficacia de una sentencia eventualmente favorable a sus intereses, pues el resultado no querido ya se habría producido y los daños así causados no tienen posible reparación, ni moral ni económica.

En un caso análogo a los anteriores, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 3 de Zaragoza (*auto de 9 de diciembre de 2008*) estima que el propio contenido del acto recurrido pone de manifiesto la concurrencia del pe-

riculum in mora, pues, de no adoptar la medida cautelar, el alumno recibiría unas enseñanzas no queridas, que soslayaría la finalidad del recurso interpuesto haciéndole perder la efectividad a la sentencia, de resultar favorable a sus intereses, pues el resultado no querido ya se habría producido. El interés público en orden a que los alumnos cursen las distintas materias no puede prevalecer, en el presente caso, sobre el interés de los padres.

2.4. Rechazo de medidas cautelares

El Tribunal Superior de Justicia de País Vasco (*Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1^a, auto de 14 de febrero [JUR 2008 55257]*) resuelve la solicitud de suspensión cautelar de ejecución del Decreto mediante el que ese establece el currículo de Educación básica y se implanta en la Comunidad Autónoma en relación con la asignatura de Educación para la ciudadanía en Primaria y Secundaria y la Educación Ético-Cívica en 4^o curso. Estiman los recurrentes que las disposiciones impugnadas dan lugar a la implantación obligatoria de una asignatura cuya finalidad es la formación de todo los alumnos en una conciencia ética inspirada, entre otras, en la ideología de género, que vulnera el derecho fundamental de los padres a elegir la formación religiosa y moral de los hijos.

Se rechaza por tres motivos:

1^o. La suspensión solicitada afectaría a normativa básica estatal (Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo), cuyo control no corresponde a la jurisdicción ordinaria sino al Tribunal Constitucional.

2^o. Los perjuicios que podrían sufrir los recurrentes se seguirían de los contenidos concretos o textos que se utilicen para la impartición de la asignatura y que, en su caso, podrán ser controlables en sus actos de aplicación correspondientes (por ej., la aprobación de los libros de texto por las autoridades educativas).

3^o. La exclusión global de la asignatura supondría que la misma no pudiera impartirse para alumnos que podrían estar interesados en recibirla.

2.5. Nulidad de normas generales

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sevilla (*Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3^a, sentencia de 30 de abril de 2008 [RJCA 2008 653]*) conoce el recurso, tramitado a través del procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales, contra los decretos del Junta de An-

dalucía 230/2007 y 231/2007, de fecha 31 de julio, por los que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria y Secundaria, respectivamente, en Andalucía y, en virtud de la posterior ampliación del recurso, sendas órdenes de la Consejería de Educación de la citada Junta, de fecha 10 agosto de 2007, por las que se regula, respectivamente, el desarrollo curricular correspondiente a la Educación Primaria y Secundaria Obligatoria, en cuanto sean susceptibles de vulnerar los derechos fundamentales del recurrente consagrados en el artículo 16 y 27. 3 de la Constitución.

Alega la parte actora, como fundamento de su pretensión, que la indicada normativa vulnera los derechos fundamentales consagrados en los artículos 16 y 27.3 de la Constitución, y ello como consecuencia del desarrollo de los currículos relativos al área Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos y de otras áreas obligatorias y optativas, por su transversalidad e interacción, toda vez que los currículos persiguen objetivos que vulneran los citados preceptos, que consagran el derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa y el derecho de los padres a elegir la formación moral y religiosa de sus hijos, respectivamente. Se pretende, a juicio de la parte actora, imponer a los alumnos una conciencia ética, de la que forma parte la denominada «ideología de género», al margen de cuál sea la opción ejercida por los padres, incluyendo, entre las materias optativas, la asignatura «cambios sociales y de género» la cual, en la práctica, puede convertirse en obligatoria; invoca, como consecuencia de la aconfesionalidad del Estado, la debida neutralidad y objetividad del sistema educativo, la infracción del principio de seguridad jurídica ante la falta de concreción y definición de contenidos de la asignatura, aprobados tras la finalización del plazo de matriculación, y, por último, la infracción del principio de legalidad por entender que el desarrolló normativo de la Ley orgánica 2/2006, reguladora del derecho de Educación no es el previsto y deseado por dicha Ley.

La sentencia estima parcialmente el recurso y declara la nulidad de ciertas expresiones contenidas en las Ordenes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía de 10 de agosto de 2007, por las que se desarrollan los currículos correspondientes a la Educación Primaria y Secundaria Obligatoria en Andalucía, con arreglo a los términos consignados en el fundamento jurídico decimotercero de la resolución. En sustancia, estima la Sala que se ha producido la vulneración de los principios de neutralidad ideológica de los poderes públicos, de pluralismo político y de libertad religiosa en la regulación contenida en la normativa autonómica a que se contrae el recurso, conclusión que se basa en que tal normativa muestra «la elaboración de un corpus dogmático de lo que es el individuo y de lo que debe ser», «una construcción ideológica dirigi-

da explícitamente a la formación moral», que introduce la denominada «ideología de género», y que presenta los principios y derechos establecidos en la Constitución y en los Tratados sobre derechos humanos como el referente moral universal y común para la conducta humana, lo cual sobrepasa los objetivos de la asignatura plasmados en el preámbulo en la Ley orgánica 2/2006 y en el artículo 27.2 de la Constitución.

2.6. Otros aspectos

El auto del Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana (*Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2^a, de 28 de julio [RJCA 2008 378]*) se dicta en pieza de medidas cautelares del recurso presentado por el Abogado del Estado contra Orden por la que se establece las formas de organización pedagógica para impartir la materia Educación para la ciudadanía y los derechos humanos en educación secundaria obligatoria.

Junto a la opción consistente en el normal desarrollo del currículo de la materia, se contempla la posibilidad de la realización de un trabajo con enfoque transversal. El texto de apoyo sería elegido con el consentimiento de la familia o de quien ejerza la patria potestad o tutela del menor. Esta segunda opción la cursarían voluntariamente quienes lo desearan y de manera obligatoria aquellos que plantearan la objeción de conciencia.

La Sala entiende que la ejecución de la opción B haría perder la finalidad legítima del recurso y que la suspensión cautelar debe otorgarse. Por una parte, el alumno que optara por la opción B no accedería a todos los contenidos y objetivos de la materia. Además —se dice— la elección de los textos por parte de la familia contraviene de forma palmaria la Ley Orgánica de Educación, que dispone que en el ejercicio de la autonomía pedagógica corresponde a los órganos de coordinación didáctica de los centros públicos adoptar los libros de texto. En suma, se considera que la ejecución de la Orden «causaría daños de imposible o difícil reparación en los alumnos».

La Audiencia Provincial de Madrid inadmitió la querrela (*auto de 13 de marzo [JUR 2008 296742]*) en la que se imputaba al querrellado, como responsable político, la limitación del ejercicio del derecho de la parte apelante a la libertad de conciencia, pues sus declaraciones supondrían una advertencia de que cualquier alumno cuyos padres ejerciten la objeción de conciencia a la asignatura educación para la ciudadanía repetiría curso.

Manifestar en términos genéricos que los alumnos que no aprueben o cursen una asignatura legalmente establecida repetirán curso, realizándose dicha

manifestación, no en relación con persona concreta alguna, sino como colofón de una previa argumentación sobre la ineficacia de la objeción de conciencia sobre el cumplimiento de la normativa que obliga a cursar dicha asignatura, no implica la emisión de amenaza alguna en el ámbito del Derecho penal.

Tampoco se describe ninguna conducta del querellado de la que pueda racionalmente predicarse que supusiera una denegación a persona alguna, individual o colectiva, de una prestación.

3. *Derecho a la educación*

El Tribunal Supremo ha conocido durante el año 2008 importantes cuestiones relativas al derecho a la educación, a la libertad de elección de centro y a los conciertos. En otras instancias jurisdiccionales aparecen otros asuntos relevantes, como el despido ideológico y el derecho al ideario.

3.1. *Elección de centro y zonificación*

La Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª, del Tribunal Supremo, interpreta de manera marcadamente estatista el artículo 27.5 de la Constitución, sobre la programación general de la enseñanza que corresponde a los poderes públicos (Me refiero a dos *sentencias de 23 de junio 2008 [RJ 2008 6497 y RJ 2008 6498]*). La zonificación que la Administración establezca a los efectos de la elección de centro debe admitirse mientras no se demuestre inequívocamente la arbitrariedad de la medida.

El origen de los litigios se encuentra en una resolución de la Consejería de Educación del principado de Asturias mediante la que se delimitaba las áreas de influencia y las áreas limítrofes de los centros docentes no universitarios públicos y privados concertados. La escasa superficie de las nuevas áreas reducía drásticamente, a juicio de los recurrentes, la posibilidad de elección de centro y ponía en peligro las legítimas expectativas de continuidad de quienes cursaban la enseñanza infantil en las etapas siguientes.

Razona la Sala que el poder público cuenta con un abanico de potestades para garantizar el derecho a la educación que se traduce en la posibilidad de establecer requisitos y condiciones para su ejercicio. El límite de tales potestades sería —dice— la prohibición de la arbitrariedad. No han demostrado los recurrentes —concluye— que la zonificación establecida por la Administración haya sido arbitraria.

Esta doctrina condujo a la anulación de una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Asturias —es la segunda sentencia a la que me refiero— que estimó, en el caso de un determinado centro docente, la lesión del derecho a la educación como consecuencia de la nueva zonificación. La sala de instancia no identificó «de manera inequívoca» la arbitrariedad de la zonificación aprobada por la Administración.

3.2. *Conciertos educativos*

Se impugna la Orden de la Consejería mediante la que se deniega a la recurrente la transformación de unidades concertadas de Formación profesional de segundo grado en unidades de Bachillerato (*Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4^a, sentencia de 29 de enero 2008 [RJ 2008 324]*).

Denuncia el recurrente la infracción de los artículos 27.9 y 14 de la Constitución y la interpretación del Tribunal Constitucional en sentencia 77/1985, de 27 de junio. En aplicación de lo que el Tribunal denomina el «principio de subsidiariedad» —tratándose en realidad de una versión invertida del mismo— se avala el criterio de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, según el cual:

resulta lógico que se conceda preponderancia a la enseñanza pública antes que acudir al régimen de conciertos, de modo que la subvención a los centros privados se justifique únicamente cuando la oferta pública de puestos escolares no tuviera capacidad para satisfacer la demanda escolar.

Radicalmente contraria a la anterior es la doctrina de la misma Sala del Tribunal Supremo en *sentencia de 6 de noviembre de 2008 (RJ 2008 6663)*, ante un supuesto de reducción de unidades escolares en la enseñanza concertada, reuniendo el centro los requisitos establecidos al efecto en la Ley. La variación jurisprudencial es más flagrante desde el momento en que el Tribunal *a quo* es la misma Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que había resuelto el recurso ante ella planteado mediante la aplicación de la doctrina ya conocida, según la cual basta que en un centro público haya vacantes para que se deniegue o reduzca el concierto a los centros privados.

Esa afirmación no puede compartirse porque es contraria a la letra y al espíritu de la Constitución y de la Ley orgánica del derecho a la educación. Y ello porque la invocación que hace el preámbulo de la Ley al principio de subsidiariedad es radicalmente contraria al sentido en el que la sentencia utiliza ese término de que habiendo oferta pública que satisfaga las necesidades que existan, la misma debe prevalecer fren-

te a la privada, de modo que no habrá lugar a concertar con centros privados (...) el principio de subsidiariedad al que se refiere la sentencia no puede aceptarse del modo que la misma lo entiende, de forma que existiendo oferta de enseñanza básica suficiente en centros públicos la misma es preferente a la existente en los centros privados que reúnan los requisitos legales que, en esos casos, no tendrán derecho al concierto.

En el ámbito de los tribunales inferiores merece destacarse una interesante resolución de 10 de septiembre de 2008, del *Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 8 de Barcelona*, que ilustra claramente acerca de la rumbosa manera de entender la Generalidad de Cataluña el principio de planificación educativa. Interponen recurso los padres contra la inadmisión de su hija en un centro concertado. El argumento para negar la escolarización deseada fue que el municipio ofrecía plazas suficientes y que estaba a disposición de la hija de los recurrentes una plaza en un centro público de nueva creación. En tal centro, en efecto, el número de plazas ofertadas era de cien y se habían cubierto noventa y cinco. Considera el Letrado que le asiste a la Generalidad en este caso «el derecho a la educación, que prevalece sobre el derecho de los recurrentes a la libre elección de centro educativo, por razones materiales y presupuestarias».

El supuesto derecho «de educación» que invoca la Administración, no sólo no puede imponerse sobre un derecho fundamental —sostiene la sentencia—, sino que no existe como tal «derecho», sino como una facultad que asiste a la Administración y en todo caso se subordina al derecho de libre elección de los padres.

No cabe desnaturalizar los derechos fundamentales, de modo que no se reconozca en ellos su fisonomía propia, como ocurre, sin duda, cuando el derecho a elegir un centro que responda al ideario religioso y moral de los padres, se reduce a la nada, al imponerse a los padres una plaza en el centro que a la Administración le conviene y que ni por aproximación ofrece lo que se buscaba del centro elegido.

Dentro aún de la materia de conciertos educativos cabe referirse a la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de febrero 2008 (*Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4^a, [RJ 2008 1532]*). La Federación de Enseñanza del sindicato de Comisiones Obreras de Castilla y León impugnó la Orden de la Consejería reguladora de los Conciertos educativos para el curso siguiente, en relación con la modificación del concierto de un centro determinado.

La reclamación sindical se funda sobre la opción que realiza en favor de la enseñanza pública y la discrepancia de un modelo de gestión educativa que contemple la ayuda a la iniciativa privada. La estimación del recurso determinaría —sostienen los recurrentes— la no atribución de fondos públicos a los colegios concertados, lo que supondría un beneficio para los miembros del sindicato

que se favorecerían del hecho de que esos fondos no usados en la enseñanza privada se emplearían en la pública. Estima la Sala que no concurre en el recurrente el derecho o interés legítimo que le habilite para la interposición del proceso.

En modo alguno ha podido concretarlo, no la legitimación abstracta que poseen los sindicatos en la defensa de los intereses de los trabajadores, sino el interés cualificado o específico que se identifica con la obtención de un beneficio o la desaparición de un perjuicio en el supuesto de que prospere la acción intentada. Lejos de ello, en el caso da autos las referencias siempre han sido genéricas y difusas y relacionadas con hipotéticos beneficios de mejor planificación y preferible utilización de los recursos públicos sin descender en modo alguno a esos intereses cualificados o específicos que requiere la legitimación ad causam.

3.3. Despido ideológico

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (*Granada, Sala de lo Social, Sección 1^a, [AS 2008 2112]*) resuelve un caso de no renovación de un contrato temporal —despido— que tuvo como motivación no ajustarse al perfil ideológico, fundamentalmente religioso, de la escuela demandada. En aplicación de la doctrina de la carga de la prueba, en los despidos discriminatorios se desplaza a la demandada la acreditación de que la medida extintiva se presenta ajena al móvil discriminatorio, lo que no se desprende del relato fáctico. No elimina el panorama discriminatorio el aparente ejercicio del derecho de libertad religiosa del centro al seleccionar a otro candidato, estando las partes de acuerdo en que no se atentó contra el ideario del centro.

3.4. Modificación de ideario

El cambio de titularidad y la modificación del ideario, que pasó a tener una inspiración religiosa católica, dio lugar a la demanda de un grupo de padres disconformes con la nueva orientación del centro (*Audiencia Provincial de Madrid [Sección 11], de 31 de marzo [JUR 2008 151105]*).

El núcleo del debate jurídico consiste —más allá de invocaciones genéricas a derechos lesionados— en determinar si se produjo un incumplimiento contractual por cambio sustancial en la prestación de los servicios educativos que hasta entonces se venía desarrollando, como consecuencia de la efectiva afectación en el sistema educativo del cambio de titularidad del centro. El incumplimiento contractual no se produjo. No puede atenderse a genéricas invocaciones, sin constatación real, sobre vulneración de preceptos constitucionales o legales, como el derecho a la libertad ideológica, derecho a la libertad de enseñanza, de-

recho de los alumnos a la libertad de conciencia... cuando no se concreta en qué aspecto puede entenderse vulnerado cualquiera de los referidos derechos.

4. Enseñanza de la religión

El Tribunal Supremo resuelve dos recursos interpuestos por Izquierda Republicana contra el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria y contra el Real Decreto 160/2006, de 29 de diciembre, que estableció las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil.

En el recurso contra el Real Decreto de secundaria (resuelto por *sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4^a, de 9 de diciembre de 2008 [RJ 2008 8084]*) se cuestionan los apartados 3, 4, 5 y 6 de la disposición adicional segunda sobre enseñanza religiosa. El número 3 versa sobre el régimen de la alternativa a la enseñanza religiosa escolar (la debida atención educativa que recibirán quienes no hayan optado por la cursar enseñanzas de religión). La Sala invoca doctrina legal consolidada así como jurisprudencia del Tribunal Constitucional para rechazar las alegaciones de los recurrentes. No puede calificarse como discriminatorio el hecho de que, quienes

no han ejercido expresamente su derecho de opción a favor de la enseñanza religiosa, reciban unas enseñanzas alternativas y complementarias, que no son objeto de evaluación.

La atención educativa alternativa no se introduce en virtud del Real Decreto 1631/2006 sino que existe, con diversas modalidades, desde hace años

y es consecuencia de los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede y del desarrollo que se ha hecho de los mismos a partir de los preceptos de la CE, fundamentalmente los arts. 16 y 27 CE. La LOE se remite en su disposición adicional segunda a estos acuerdos aunque no mencione expresamente la atención educativa alternativa a la que se refiere el RD 1631/2006. Por otra parte, el RD 1631/2006, se dicta en respuesta al mandato contenido en el art. 6.2 LOE, según el cual corresponde al gobierno fijar las enseñanzas mínimas a las que se refiere la disposición adicional primera, apartado 2, letra c) de la Ley orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del derecho a la educación. No se ve pues en qué manera se infringen los principios de legalidad y seguridad jurídica a los que tan vagamente se alude. El Reglamento se dicta con plena habilitación legal».

En tercer lugar la parte recurrente impugna los apartados 5 y 6 de la misma disposición adicional segunda, sobre evaluación de la asignatura y determinación del currículo, por vulneración de los artículos 27.2 y 16.3 de la Constitución Española. Se rechaza tal alegación.

De una parte porque junto al carácter no confesional del Estado la Constitución garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto, señalando el artículo 16.3 que «los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones» y en la misma línea aparece la Ley orgánica 7/1980 de 5 de julio, de libertad religiosa.

De otra parte, porque los apartados aquí impugnados no hacen sino recoger el contenido de los Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede, así como los suscritos por el Estado con otras confesiones, y por tanto la vía de su impugnación sería la de la impugnación de tales Acuerdos (...).

Y en fin porque, entre otras, en sentencia de 15 de febrero de 2007, el Tribunal Constitucional ha declarado «el derecho de libertad religiosa y el principio de neutralidad religiosa del Estado implican que la impartición de la enseñanza religiosa asumida por el Estado en el marco de su deber de cooperación con las confesiones religiosas se realice por las personas que las confesiones consideren cualificadas para ello y con el contenido dogmático por ellas decidido».

En el recurso que resuelve la segunda de las sentencias recogidas en esta sección (sentencia del Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4^a, de 10 de diciembre de 2008 [RJ 2008 8097]), se impugna la norma que establece, en Educación Infantil, la determinación del currículo de la enseñanza religiosa escolar por parte de las confesiones religiosas, por vulneración del modelo constitucional de laicidad del Estado, según el artículo 16.3 de la Constitución: «Ninguna confesión tendrá carácter estatal».

Ciertamente, el Estado no puede identificarse con confesión alguna ni adherirse a los principios que la misma profese. En el Estado que se proclama aconfesional se trasluce una posición de neutralidad frente a las distintas confesiones y, en consecuencia, en relación con el fenómeno religioso. Ahora bien, la Constitución española,

aun reconociendo el principio básico de la aconfesionalidad del Estado, admite, de igual modo, las creencias religiosas de la sociedad española y, en particular, la de la mayoría de su población que se confiesa católica. De este modo dispone las consiguientes relaciones de cooperación que en el caso de la Iglesia católica se articulan mediante un Acuerdo que tiene el valor de Tratado internacional al reconocer el Estado español la personalidad jurídica internacional de Estado soberano reconocida a la Santa Sede, mientras que, en el caso del resto de confesiones, esos acuerdos de cooperación se instrumentan mediante Ley.

Lo que acabamos de poner de manifiesto muestra a las claras que el Real Decreto y la Ley orgánica que desarrolla, en modo alguno pueden contravenir ese principio de aconfesionalidad del Estado que se mantiene incólume por el hecho de que los

poderes públicos reconozcan el hecho religioso al que tienen derecho todas las personas, y que se plasma en esas relaciones de cooperación entre el Estado y las distintas confesiones.

La norma recurrida tampoco vulnera el artículo 27.2 de la Constitución, según el cual «la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales», al que se refiere la demanda en relación con el número 3 del propio precepto.

Ese doble objeto que cumple la educación en relación con el pleno desarrollo de la personalidad humana y en el respeto a los principios democráticos de convivencia, no se confronta o se opone al reconocimiento que efectúa el número 3 del mismo artículo del derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones y que los poderes públicos garantizan.

Cumplidos los objetivos generales que demanda la educación en el marco del respeto del pleno desarrollo de la personalidad humana y los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, es igualmente obligado el respeto por todos, incluido el Estado, de que la educación que se imparta salvaguarde el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

En consecuencia el currículo de la enseñanza religiosa no suplanta la acción del Estado que es la referida en el número 2 del art. 27 de la Constitución, sino que lejos de ello la acomoda con el mandato que también le impone el núm. 3 del artículo 27 de respetar el conocimiento de los valores religiosos y morales que los padres deseen para sus hijos dentro del respeto a la libertad religiosa que la Constitución reconoce.

El deber de cooperación establecido en el artículo 16.3 de la Constitución, en suma, encuentra en la inserción de la religión en el itinerario educativo un cauce posible para la realización de la libertad religiosa, en concurrencia con el ejercicio del derecho a una educación conforme con las propias convicciones religiosas y morales.

5. Profesores de religión

Entre las resoluciones más interesantes del año 2008 sobre profesores de religión se encuentran varias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, donde se libra desde hace casi diez años una singular batalla como consecuencia de la supuesta lesión de derechos fundamentales de ciertos profesores de religión. Añade interés al debate jurídico la circunstancia de que los tribunales ordinarios tienen que interpretar con referencia al caso la doctrina del Tribunal

Constitucional en sentencia de 15 de febrero de 2007, que reconoció amplias facultades al Ordinario en la designación del candidato al puesto.

Los derechos económicos de los profesores de religión han suscitado algunos casos relevantes. El asunto de la indemnización por finalización del contrato temporal está llamado a ser superado por la transformación de los contratos en indefinidos. Hay aspectos controvertidos, sin embargo, en materia de Seguridad Social.

La baremación de los méritos correspondientes a la enseñanza religiosa escolar es otra faceta de frecuente litigiosidad, que también se ha hecho presente durante el año 2008.

Recojo un caso relativo a profesores de religión evangélica.

5.1. *Contratación del profesorado de religión y derechos fundamentales*

La sentencia de instancia declaró la nulidad radical de la decisión del Obispo de no proponer para el nuevo curso a la profesora de religión demandante, por vulneración de derechos constitucionales (huelga, libertad sindical y libertad de expresión), y condenó al obispado a formular la propuesta de la profesora.

La Sala, en suplicación (*Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Las Palmas. Sala de lo Social, Sección 1^a, sentencia de 31 de enero [AS 2008 958]*) confirma la sentencia. Interpreta la doctrina del Tribunal Constitucional en sentencia de 15 de febrero de 2007, dictada a propósito de la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el propio Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el sentido de que los órganos jurisdiccionales son competentes para controlar las decisiones de contratación de los profesores de religión desde la perspectiva de la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, pues la libertad de criterio para la selección de profesores han de tener en cuenta las exigencias inexcusables de indemnidad del orden constitucional de valores y principios cifrado en la cláusula de orden público constitucional.

(En el mismo sentido, *sentencias de 27 de febrero [AS 2008 1424], de 29 de febrero [JUR 2008 165576] y de 1 de abril [JUR 2008 126036]*).

La misma Sala (*sentencia de 30 de junio [JUR 2008 308623]*) estima el recurso de suplicación interpuesto por una profesora de religión contra la Consejería de Educación y el Obispado. La sentencia de instancia desestimó la demanda de despido por inadecuación del procedimiento: no se trataba de un supuesto de despido sino de falta de contratación.

Se anula la sentencia y se obliga al órgano judicial *a quo* a entrar en el fondo. Aun admitiendo la incorrección del planteamiento de la demanda, la Sala considera irrelevante la distinción formal e interpreta los hechos como despido. Lo justifica alegando que aquí no se ejercita una simple acción de despido sino una acción de despido por vulneración de derechos fundamentales. Si en el plano de la legalidad ordinaria el vínculo del profesor de religión (no indefinido) se extingue por cumplimiento del término resultante de una designación de vigencia anual, concurrente un panorama atentatorio de derechos fundamentales, la libertad de contratación se presenta con clara dimensión constitucional.

5.2. *Indemnización por finalización del contrato y otros derechos económicos*

En sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 13 de abril de 2007 se dirime la cuestión relativa al derecho de los actores, profesores de religión y moral católica en centros públicos, al abono de la correspondiente indemnización al término del contrato temporal suscrito; y si de la misma es responsable la Administración del Principado de Asturias o el codemandado Ministerio de Educación y Ciencia. La Sala estimó la pretensión en tal sentido deducida en la demanda, condenando a este último. El Tribunal Supremo (*Sala de lo Social, Sección 1^ª, auto de 14 de mayo [JUR 2008 194483]*), en recurso de unificación de doctrina confirma la decisión de la Sala asturiana. La sentencia de contraste aportada por el Ministerio no es en realidad contradictoria, sino coincidentes en la no afectación de las transferencias en materia educativa a los profesores de religión.

El Ministerio de Educación recurre ante el *Tribunal Superior de Justicia de Asturias, (Sala de lo Social, Sección 1^ª)*, la sentencia del Juzgado de lo social que declaró haber lugar a la indemnización —con cargo al Ministerio— por la finalización del contrato que reclamaban las demandantes, profesoras de religión. Resuelve mediante *sentencia de 11 de enero (JUR 2008 87972)*, con la doctrina del Tribunal Supremo, en sentencia de 21 de julio de 2004: las transferencias en materia de enseñanza no universitaria no habían alcanzado en el Principado de Asturias a la enseñanza específica de la religión católica, cuya financiación por cuenta del Estado está prevista en el Acuerdo entre España y la Santa Sede, de 3 de enero de 1979, por lo que es el Ministerio de Educación el que ha de hacerse cargo de la retribución de los profesores, en tanto estas transferencias no se lleven a cabo. El traspaso efectivo se produjo por Real Decreto 1291/2005, sobre determinación del coste efectivo correspondiente a los servi-

cios traspasados en materia de enseñanza no universitaria (profesorado de religión), que entró en vigor el 1 de enero de 2006, de manera que no cabe aplicarse al caso presente.

En los siguientes casos presentados ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, (*Sala de lo Social, Sección 1ª, sentencias de 3 de octubre [JUR 2008 351745], de 10 de octubre [JUR 2008 359937] y de 17 de octubre [JUR 2008 359655]*) la representación procesal del Ministerio de Educación argumenta, para sustraerse a la obligación de abonar la indemnización por terminación de contrato a profesores de religión, que, en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional 3ª de la LOE, esos contratos han pasado a ser indefinidos. No es así, sólo a partir del 10 de junio de 2007, fecha en que entró en vigor el Real Decreto 696/2007, por el que se regula la relación laboral de los profesores de religión prevista en la disposición adicional 3ª de la LOE, los profesores contratados para el curso 2006-2007 pasaron a tener una relación laboral de carácter indefinida. Sí, en cambio, debe estimarse en vigor el Real Decreto 1291/2005, sobre determinación del coste efectivo correspondiente a los servicios traspasados en materia de enseñanza no universitaria (profesorado de religión), que hace recaer la responsabilidad del pago, como empleador de los trabajadores, en el Principado de Asturias.

Señala el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, (*Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª, sentencia de 21 de enero [JUR 2008 184216]*) que los profesores de religión desarrollan una función pública docente, con independencia de la relación jurídica que les vincule con la Administración. No sólo los pertenecientes a los cuerpos docentes, que con carácter preferente se ocupan de esa docencia en las etapas de infantil y primaria, sino también quienes no pertenecen a ellos. Se reconoce a todos los profesores de religión el derecho al complemento específico anual (sexenio).

5.3. *La enseñanza de la religión como experiencia docente*

En sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, (*Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª, de 16 de julio [JUR 2008 243090]*) se da respuesta a la petición de nulidad de la resolución administrativa que no admitió como mérito docente la puntuación correspondiente a los años trabajados como profesora de religión. Se discute, en esencia, si la asignatura de religión tiene la consideración de especialidad, no obstante no estar comprendida en la enumeración del artículo 16 de la LOGSE, según el cual la educación primaria será impartida por maestros que tendrán competencia en todas las áreas de este nivel y, a continuación, establece la enseñanza de música, de la educación fí-

sica, de los idiomas extranjeros o de aquellas enseñanzas que se determinen, serán impartidas por maestros con la especialización correspondiente.

Es opinión de la Sala que resulta ajustado a Derecho entender la asignatura de religión como especialidad a los efectos de integración del concepto de área educativa, pues la solución contraria vulneraría la equiparación de dicha asignatura con las restantes establecida en el Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado español. Añade la importante salvedad de que la pretensión de la actora en este caso es posible toda vez que la impartición de la asignatura de religión se hizo estando en posesión de la titulación académica de Magisterio.

Sobre la misma materia, si bien en circunstancias distintas, se pronuncia Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sevilla (*Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3^a, sentencia de 31 de enero [JUR 2008 267592]*). La experiencia docente como profesora de religión en varios centros públicos no fue tenida en cuenta en la baremación de méritos para concurso oposición de ingreso en el Cuerpo de Maestros. Confirma la Sala la resolución administrativa por preclusión del derecho de la recurrente, que no formuló alegaciones a la lista provisional como se establecía en las bases de convocatoria.

Ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (*Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7^a, sentencia de 5 de mayo [JUR 2008 295381]*) se discute la baremación de méritos para concurso oposición de ingreso en el Cuerpo de Maestros. Las bases de convocatoria constituyen la ley del proceso selectivo, que pueden ser impugnadas, pero han de serlo en los casos y en los plazos previstos en el Ordenamiento jurídico lo que, de no llevarse a cabo, impide la ulterior impugnación de la resolución. En el caso, la certificación de la experiencia docente no contenía, como prescribían las Bases, la fecha de inicio y fin del contrato laboral ni se aportaron, porque no aparecen en el expediente si se alega, fotocopias de los respectivos nombramientos o ceses. La Comisión no pudo hacer la valoración del mérito referido, debido, en definitiva, a la escasa diligencia de la propia interesada.

5.4. Jubilación

Estima la demandante (*Tribunal Superior de Justicia de Murcia (Sala de lo Social, Sección 1^a, sentencia de 18 de febrero [JUR 2008 145361]*) que ciertos períodos en los que trabajó como profesora de religión —servicios prestados como funcionaria interina, según dictaminó mediante sentencia la Audiencia Nacional—, no fueron reconocidos a efectos del cálculo de la pensión de jubilación.

Interpone recurso el Obispado de Cartagena, como condenado en la sentencia de instancia.

Declara la Sala de suplicación la falta de legitimación *ad causam* de la demandada.

El verdadero empleador de estos profesores de religión es el Ministerio de Educación, y la Iglesia es pagadora por cuenta de otro o distribuidora de fondos recibidos del Estado español. En consecuencia, el recurso del obispado debe ser aceptado al carecer de legitimación en cuanto al fondo de la litis, pues no es empleador y en nada le afecta la resolución aquí debatida.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Social, Sección 3^a, sentencia de 25 de febrero [AS 2008 1422]) conoce recurso en el que el actor invoca su derecho a percibir la pensión de jubilación con arreglo a una base y porcentaje superior, por la falta de cotización durante los años en que la prestación de servicios como profesor de religión no fue considerada relación laboral. Con anterioridad a que la Ley 50/1998 hiciera declaración explícita en ese sentido, la jurisprudencia ya había señalado que

concurrían las notas del artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores para calificar como de laboral la relación jurídica existente entre las partes, tales como voluntariedad, ajeneidad, retribución y sometimiento a una organización empresarial docente.

De acuerdo con lo anterior, añade la Sala,

la nueva Ley despliega sus efectos jurídicos para normalizar las situaciones de hecho y adecuarlas de acuerdo con el carácter laboral de la relación jurídica entre la Administración estatal y los profesores de religión de los centros donde se imparte dicha enseñanza pública, en especial los efectos económicos derivados de la misma y también todos los relativos a la cotización de este colectivo en la Seguridad Social y sus derechos sociales, como lo ha entendido una jurisprudencia unánime de la jurisdicción social, que entiende que el ALTA en la Seguridad Social tiene efectos desde el mismo momento en que los Profesores de Religión comenzaron a realizar a favor del Estado su prestación laboral como tales. Lo anterior no es baladí, si tenemos en cuenta que muchos Profesores encuadrados en dicha colectividad ya debían de haber sido dados de alta en la Seguridad Social por sus respectivos empleadores, en este caso la Administración Pública, sin que tal obligación haya acontecido, o bien, si se ha efectuado, se ha realizado, posteriormente al inicio de la relación laboral, debiéndose, por tanto, regularizar la anterior anomalía para así garantizar los derechos sociales y económicos del colectivo de Profesores de Religión.

Correspondía, en suma, la inclusión del actor en el Régimen General desde la fecha en que se inició la prestación de servicios, debiendo tenerse en cuenta a efectos de determinar el porcentaje a aplicar a la base reguladora de la pensión de jubilación los períodos de tiempo que no fueron cotizados.

5.5. Profesores de religión evangélica

Pastora de la Iglesia Evangélica demanda por despido a la Consejería valenciana y al Ministerio de Educación (*Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Sala de lo Social, Sección 1^a, sentencia de 5 de febrero [JUR 2008 146274]*). En aplicación de la Resolución de 23 de abril de 1999 de la Subsecretaría del Ministerio de Educación, por la que se publica el «Convenio sobre designación y régimen económico de las personas encargadas de la enseñanza religiosa evangélica, en los centros docentes de educación primaria y secundaria», estimó la Consejería que el centro no cumplía los requisitos establecidos en el Convenio para la impartición de la enseñanza religiosa evangélica, toda vez que el número de alumnos era inferior a diez. En realidad, la pastora nunca formalizó contrato de trabajo y la Administración autonómica no ha ostentado en ningún momento la condición de empleadora de la demandante. Se declara la falta de legitimación pasiva de la demandada.

6. Símbolos religiosos

La *sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Valladolid, de 14 de noviembre (RJCA 2008 695)*, encontró en su momento un considerable eco en los medios de comunicación.

Era demandante, a través del procedimiento especial de protección de derechos fundamentales, la asociación «Escuela Laica de Valladolid», que solicitó se declarase nula y sin efecto la resolución del Consejo Escolar del Colegio Público Macías Picabea de no proceder a la retirada de símbolos religiosos.

Entiende el Magistrado-Juez que

la presencia de símbolos religiosos en las aulas y dependencias comunes del centro educativo público en el que se imparte enseñanza a menores que se encuentran en plena fase de formación de su personalidad vulnera los derechos fundamentales contemplados en el artículo 14 y 16.1 y 3.

Según la concepción del Juez, la neutralidad del Estado padecería si alguien pudiera sentir que, por motivos religiosos, «el Estado le es más o menos próximo que a sus conciudadanos». Y añade:

La presencia de estos símbolos en estas zonas comunes del centro educativo público, en el que reciben educación menores de edad en plena fase de formación de su voluntad e intelecto, puede provocar es éstos el sentimiento de que el Estado está más cercano a la confesión con la que guardan relación los símbolos presentes en el centro público que a otras confesiones respecto de las que no está presente ningún sím-

bolo en el centro público, con lo que el efecto que se produce, o puede producirse, con la presencia de los símbolos religiosos es la aproximación a la confesión religiosa representada en el centro por considerar que es la más próxima al Estado y una forma de estar mas próximo a éste.

7. Seguridad Social

En esta sección se da cuenta de los litigios en materia de Seguridad Social promovidos por sacerdotes o religiosos secularizados.

El Tribunal Supremo (*Sala de lo Social, Sección 1^a, sentencia de 13 de octubre [RJ 2008 5660]*) conoce la reclamación de religiosa secularizada que pretende mejorar su pensión de jubilación con el cómputo de los años de profesión religiosa. El debate gira en torno a la interpretación de los Reales Decretos 487 y 2665/1998, de marzo y diciembre, respectivamente, que asumieron la función de remediar la situación protectora del colectivo. La duda estriba en si el período de asimilación a la cotización, a efecto de revalorizar la pensión correspondiente a la verdadera cotización, exige el requisito de haber cumplido los sesenta y cinco años. El Tribunal Supremo unifica doctrina, en el sentido de que el artículo 2 del Real Decreto 2665/1998 no menciona la exigencia de edad —a la que sí se refiere, en cambio, el artículo 1 del Real Decreto 487/1998—, de manera que la mejora de la pensión se regirá por las normas generales en la materia, fijada en sesenta y un años.

Sacerdote secularizado reclama ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (*Sala de lo Social, Sección 1^a, de 29 de abril [JUR 2008 160556]*), pensión de jubilación por determinados años en los que prestó servicio ministerial fuera de España. Carece de cotizaciones en la Seguridad Social española. La Sala resuelve con arreglo a la doctrina del Tribunal Supremo según la cual, ni la norma del cómputo del período de seguro de los sacerdotes y religiosos secularizados, ni tampoco las disposiciones de inclusión de sacerdotes y religiosos en la Seguridad Social están exentas de las exigencias legales generales de encuadramiento dentro del marco de protección del sistema de la Seguridad Social, una de las cuales es el ejercicio de la actividad en territorio nacional.

En sentencia de la Audiencia Nacional (*Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7^a, de 19 de mayo [JUR 2008 213667]*) se reconoce al demandante, en aplicación del artículo 2.1 del Real Decreto 432/2000, de 31 de marzo, por el que se regula el cómputo en el Régimen de Clases Pasivas del Estado de los períodos reconocidos como cotizados a la Seguridad Social en favor de sacerdotes y religiosos o religiosas de la Iglesia católica secularizados, la pensión

sobre los años cotizados más los períodos computados como sacerdote. No procede efectuar el nuevo cómputo que solicita.

8. *Matrimonio*

Además de diversos pronunciamientos de tribunales menores, no carentes de interés, sobre declaración de ajuste al Derecho del Estado de las sentencias canónicas de nulidad de matrimonio, hay una resolución del Tribunal Constitucional, a propósito de una cuestión de inconstitucionalidad planteada por Juez encargado del Registro Civil, y una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, sobre la no asimilación del matrimonio a la convivencia *more uxorio* a los efectos de causar pensión de viudedad.

8.1. *Contrayentes del mismo sexo*

Mediante auto de 16 de enero, (RTC 2008 12 AUTO), el Pleno del Tribunal Constitucional resolvió no admitir a trámite una cuestión de constitucionalidad planteada por Juez titular de primera instancia e instrucción y encargado del Registro Civil, en relación con el artículo 44.2 del Código Civil, en la redacción dada por la Ley 13/2005 («El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean de mismo o diferente sexo»), por la posible contradicción con los artículos 14, 16 y 32 de la Constitución. En el auto de planteamiento expone que la facultad del Juez encargado del Registro Civil de promover la cuestión de constitucionalidad se funda sobre la consideración de que es verdadero órgano judicial independiente en sus funciones, que está legitimado para promover cuestiones de constitucionalidad cuando tenga que aplicar una Ley de cuya constitucionalidad dude.

El Tribunal Constitucional resuelve con arreglo a la doctrina del auto 505/2005, según la cual carece de legitimación un juez encargado del Registro Civil para plantear en un expediente registral una cuestión de constitucionalidad, por razón del carácter no jurisdiccional del expediente en que se plantea; la cuestión de constitucionalidad no resulta propuesta por un órgano judicial en un proceso en el que el fallo que haya de dictarse dependa de la validez de la norma legal cuestionada.

Tres votos particulares consideran que el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad por parte del Juez fue impecable. Se reconoce la legitimación para formular la cuestión de inconstitucionalidad cuando el Juez actúa dentro del proceso y también cuando el Juez desarrolla su actuación en garan-

tía de un derecho fundamental. Ejerce poderes decisorios, aunque se trate de actuaciones de naturaleza no procesal. Se argumenta, asimismo, que el expediente previo al matrimonio se concluye con un auto judicial aprobando o denegando la celebración del matrimonio, sin que resulte decisivo para negar la naturaleza decisoria de los actos del Juez la existencia de un recurso gubernativo frente al auto resolutorio.

8.2. *Pensión de viudedad*

A los efectos de causar pensión de viudedad, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (*Sala de lo Social, Sección 1^a, sentencia de 30 de mayo [JUR 2008 176706]*), considera que la convivencia *more uxorio* no es asimilable al matrimonio. El propósito de contraer matrimonio no puede valorarse como la existencia del mismo; aunque el matrimonio es consensual, la forma del matrimonio es esencial al mismo, ya que la existencia de que este consentimiento conste de modo indubitado y público lo requiere la trascendencia que el matrimonio tiene para los contrayentes, su posible descendencia y la sociedad toda. La naturaleza del matrimonio impide que el consentimiento presunto sea equivalente al consentimiento formal.

8.3. *Ajuste al Derecho del Estado*

Según la Audiencia Provincial de A Coruña (*Sección 4^a, auto 16/2008, de 8 de febrero [JUR 2008 131140]*), la rebeldía en un proceso canónico matrimonial no se juzga con los mismos criterios que la que tiene lugar en un procedimiento ordinario de *exequátur*. Junto al concepto de rebeldía se encuentra el derecho de libertad religiosa y el principio de aconfesionalidad del Estado. Con arreglo a la doctrina del Tribunal Supremo, en sentencia de 27 de junio de 2002, declara la Sala que no se puede obligar a la parte ausente que se atenga a las consecuencias de una resolución canónica, cuando voluntariamente no quiere someterse al proceso canónico matrimonial de la que la misma es consecuencia, ya sea por sus convicciones o, incluso, por su interés.

La Audiencia Provincial de Madrid (*Sección 24^a, sentencia 282/2008, de 5 de marzo [JUR 2008 143319]*) entiende que la declaración de ajuste de la resolución canónica matrimonial al Derecho del Estado no supone la concurrencia de

una precisa, literal y férrea identidad entre las causas de disolución canónica y las civiles, del art. 73 del Código Civil. Al resultar acomodado al orden público interno la celebración del matrimonio canónico, que el Código Civil prevé en sus artículos 49 y

60 con reconocimiento de efectos civiles —y consiguiente reenvío de las normas canónicas—, los particulares que en uso de su libertad de conciencia acceden libre y conjuntamente a dicha forma de unión sacramental, lo hacen con la plenitud de sus efectos y consecuencias, lo que se traduce en que la voluntad respetada de los cónyuges para optar por la forma religiosa se proyecte también al momento de extinción del matrimonio, cuando es decretado con las debidas garantías y formalidades por la autoridad religiosa competente para ello, sin que la voluntad del legislador deba ser obstaculizada y tenga que imponerse necesariamente para anular la de los contrayentes, de no resultar incidencia constatada en el orden público interno, ni chocar frontalmente contra los principios generales de nuestro Ordenamiento Jurídico. Entenderlo de otro modo llevaría a tener que remontarse a situaciones de mala fe o de fraude a cargo del Estado al hacer inoperante el Acuerdo con la Santa Sede.

9. Entidades religiosas

Sostiene la sentencia del Tribunal Supremo (*Sala de lo Civil, Sección 1^a, de 19 de junio [RJ 2008 3226]*) que la donación *mortis causa* en favor de la diócesis para constituir una fundación canónica no llegó a tener eficacia civil, siendo así que para su validez, según el artículo 620 del Código Civil, era necesario guardar las formas y solemnidades del testamento. El Ordenamiento jurídico español reconoce que las instituciones de la Iglesia católica —entre ellas las fundaciones canónicas— se rigen por el Código de Derecho Canónico con la plena eficacia que les viene atribuida por los Acuerdos entre el Estado español y la Santa sede; sin embargo, un negocio jurídico mediante el que se dispone de determinados bienes para la constitución o aumento del patrimonio separado, que integra una fundación canónica, constituye materia propia del Derecho civil y resulta regulado por el mismo.

10. Capellanes de hospitales. Relación laboral

Capellanes de hospitales demandan el reconocimiento del carácter laboral de su relación de servicios ante el Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. Conoce el caso el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (*Sala de lo Social, Sección 1^a*), y resuelve en *sentencia de 6 de marzo (AS 2008 1430)* que no es indebida la aplicación de los artículos 1.1 y 8.1 del Estatuto de los Trabajadores, pues concurre la nota de la ajenidad en la relación que une a los actores con el consorcio, en contra del argumento del alegato impugnatorio del letrado que suscribe el recurso. En efecto, la ajenidad concurre si la prestación del servicio tiene lugar bajo la dirección del empleador y para satisfacer las necesidades de los clientes o usuarios a favor de los que se presta. En el asunto

enjuiciado concurren los tres indicios que permiten afirmar la existencia de ajenidad en la relación de trabajo, por cuanto los actores no adoptan decisiones sobre las relaciones con los usuarios sino que esta facultad queda reservada a la dirección del hospital; la remuneración que perciben por su trabajo es fija y periódica y su actividad laboral se desarrolla en exclusiva para la entidad demandada. El servicio de asistencia religiosa se configura como unos más de los servicios que conforman el organigrama del hospital, con plena integración en los mismos. Declarada la naturaleza laboral de la relación, corresponde la aplicación automática a los litigantes del convenio colectivo del Consorcio Hospital General de Valencia.

11. Exención del IVA

Entre las cuestiones fiscales más reseñables se cuentan varias resoluciones de Tribunales Superiores (*Cataluña, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1^a, sentencia de 13 de febrero [JUR 2008 136769]* y *Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5^a, sentencia de 16 de abril [JUR 2008 161485]*) que resuelven recursos presentados por entidades eclesíásticas contra denegaciones de exención del IVA por las obras realizadas. Se cuestiona la interpretación de los términos de la Orden de 29 de febrero de 1988 dictada para aclarar el alcance de las exenciones reconocidas a la Iglesia católica en la materia, hoy derogada.

Quedan por reseñar dos resoluciones de la Dirección General de Tributos en materia de IVA. En la primera (*Resolución n. 192/2008, de 4 de febrero [JUR 2008 97457]*), se plantean dudas acerca de la aplicación transitoria de la exención del Impuesto a las entidades orgánicas de la Iglesia católica, tras la Orden EHC/3958/2006, de 28 de diciembre. En la segunda (*Resolución n. 1447/2008, de 8 de julio [JUR 2008 1085]*), la entidad consultante es un instituto religioso que regenta dos colegios. Plantea si en la operación de adquisición por permuta de un nuevo colegio, con casa-vivienda y capilla, los importes correspondientes a la residencia y la capilla estarían exentos del Impuesto sobre el Valor Añadido y sujetos al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, y si la adquisición del colegio estaría sujeta o no al segundo de los impuestos referidos.

12. Actividades delictivas

Mediante *auto del Juzgado de 1^a instancia e Instrucción n. 4 de San Lorenzo del Escorial, de 7 de noviembre de 2008*, se declara no acreditados los delitos

que se imputan a una organización religiosa —estafa, coacciones, detención ilegal, asociación ilícita— por parte de unas supuestas «víctimas» de su actividad.

No se puede concluir que estemos ante la comisión de algunos de los delitos denunciados, sino más bien ante una mal llevada asunción de creencias de un grupo de personas, que amparadas en lo establecido en el artículo 16 de la Constitución española han optado libremente por ese modo de vida. Resulta gratuito recordar que en Derecho penal rige el principio de intervención mínima. Sin embargo, el querellante utiliza esta vía para resolver pretensiones o reivindicaciones no sólo ajenas al Derecho penal, sino a cualquier otra rama del Derecho, poniéndose en evidencia la inconsistencia de su postura procesal.

13. Límites del derecho de libertad religiosa

La Audiencia Nacional (*Sala de lo Contencioso-Administrativo, sentencia de 16 de enero de 2008 [JUR 2008 87642]*) afronta un caso de limitación de la libertad religiosa por razones de salud. La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios desestimó la petición de la Iglesia del Santo Daime de España sobre tenencia para uso confesional no comercial de la ayahuasca, por considerarla una sustancia psicotrópica. La ayahuasca tiene una tradición milenaria de consumo ritual dentro de culturas indígenas amazónicas y desde principios del siglo pasado también es consumida por un número importante de Iglesias sincréticas de origen brasileño, que combinan cosmologías chamánicas amazónicas con cosmovisiones de tradición cristiana y de otras religiones.

La demandante pretendía, alegando la libertad de culto, la administración a sus fieles de la infusión obtenida del tallo de la planta «*Banisteriopsis caapi*» —conocida como Ayahuasca o Santo Daime—, de acuerdo con los usos litúrgicos de la referida confesión, en los que su ingesta es utilizada de forma sacramental.

La mencionada planta, por razón de su toxicidad, se incluye entre las prohibidas por el Ministerio de Sanidad y Consumo, lo que justifica la prohibición. En este caso, sin embargo, invoca el apelante la prevalencia de las libertades fundamentales amparadas en el artículo 16 de la Constitución y en la Ley orgánica de Libertad Religiosa. No es así, a juicio de la Sala, por más que la argumentación resulte pobre y escasa:

Operan como límite de aquel derecho, no sólo razones de salud, sino razones de orden público conforme a las previsiones legales, lo que nos conduce a las consideraciones efectuadas al inicio acerca de las limitaciones que la ley y los Convenios internacionales ratificados por España imponen en relación al uso de sustancias psicotrópicas. Tal y como expresamos anteriormente, el ejercicio de los derechos amparados

y reconocidos en el artículo 16 de la CE no pueden desconocer el marco legal en el que ha de desenvolverse, razón por la no podemos entender que se vulnere el derecho a practicar los actos de culto cuando en el mismo se pretende el uso y tenencia de sustancias sujetas a un estricto régimen de intervención, en que el se prohíbe el uso ajeno a fines médicos o de investigación.

Por otra parte, la Audiencia Nacional (*Sala de lo Contencioso-Administrativo, sentencia de 18 de septiembre de 2008 [JUR 2008 320623]*) examina una resolución denegatoria de nacionalidad, que no responde a motivaciones contrarias a la libertad ideológica o religiosa del solicitante, sino a su vinculación, según los informes del CNI, con una organización islámica radical.

La pertenencia, colaboración, e incluso mera empatía con esta organización supone una palmaria incompatibilidad con los valores democráticamente asentados en nuestro país.